



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO
RIOHACHA – LA GUAJIRA

CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS (04-05-2023)

REF. PROCESO EJECUTIVO SEGUIDO DE ORDINARIO LABORAL DE **MANUEL ENRIQUE RIVADENEIRA GARAY** contra **E.S.E HOSPITAL SANTA TERESA DE JESÚS DE ÁVILA DE DIBULLA- LA GUAJIRA.**

Rad. 44.001.3105.002.2016.000175.00

AUTO INTERLOCUTORIO.

Analizado el informe secretarial y revisado el trámite de la referencia, observa este despacho que el apoderado de la parte demandada presenta memorial contentivo de incidente solicitando Declaratoria de Falta de Jurisdicción y competencia en este juzgado para conocer del proceso de la referencia. Para resolver se tendrán en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:

A través de apoderado judicial el actor **MANUEL ENRIQUE RIVADENEIRA GARAY**, presentó demanda ejecutiva a continuación de proceso ordinario laboral, con el propósito de exigir el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la sentencia de primera instancia proferida por este juzgado el 17 de julio de 2019, más las costas y agencias en derecho, por lo que este juzgado el día 26 de febrero de 2020, libró mandamiento de pago por dichos emolumentos laborales. Continuando con el proceso ejecutivo, se decretan medidas cautelares, notificada la demanda a la entidad demandada, ésta no presentó escrito de contestación ni medios exceptivos, por lo que el juzgado profiere sentencia ordenando seguir adelante con la ejecución, se ordenó realizar la liquidación del crédito y se condenó en costas a la demanda.

Seguidamente se decretan medidas cautelares. La parte demandante realiza cesión del crédito, la cual es aceptada por el despacho en auto del 25 de noviembre de 2022.

Posteriormente, la parte actora presenta liquidación del crédito y solicita ampliación de medidas cautelares. Posterior a ello, el apoderado de la entidad demandada el 22 de marzo de 2023, mediante memorial remitido a través del correo electrónico institucional presenta incidente solicitando declaratoria de falta de jurisdicción.

Atendiendo el escrito presentado por el apoderado judicial del **E.S.E HOSPITAL SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA DE DIBULLA**, en el que pretende se declare la falta de jurisdicción y competencia de la jurisdicción ordinaria laboral para conocer de este proceso. 2.-Se remita al proceso para que sea desatado por la jurisdicción contencioso-administrativa. 3.- En consecuencia de la declaratoria de falta de jurisdicción y competencia de la jurisdicción ordinaria laboral, se declare nula la sentencia de primera instancia, y se conserve la validez de todas las actuaciones anteriores a la sentencia de primera instancia.

El incidentante fundamenta sus pretensiones en que la parte actora presentó demanda ordinaria para el reconocimiento de un presunto contrato realidad entre él y la E.S.E. demandada. Que de conformidad a los documentos aportados a la demanda, hace referencia a órdenes de prestación de servicio y no a contratos laborales. Que mediante



auto del 2 de agosto de 2017 fue admitida la demanda referenciada y el 11 de junio de 2019, este juzgado profirió sentencia de primera instancia, anotando que durante el trámite del proceso ordinario no se hizo mención a la jurisdicción y/o competencia de este juzgado para tener conocimiento del litigio. Se refirió a la naturaleza jurídica de las E.S.E. y del Hospital demandado, afirmando que los contratos que celebra la ESE Santa Teresa de Jesús de Ávila son de naturaleza jurídica estatal. También afirma el memorialista que la competencia para conocer de los contratos celebrados por una entidad pública, de conformidad con el artículo 104 del CPACA numeral 2, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del estado.

Concluyó el incidentante diciendo: *“para este operador jurídico es claro que las piezas procesales aportadas con la demanda se extrae que nos encontramos frente a una orden de prestación de servicios y no a contratos laborales; caso en el cual la Corte Constitucional ha establecido que la jurisdicción competente es la **contenciosa-administrativa**, siendo esta la que deberá dirimir la litis planteada para declarar la existencia o no del contrato realidad; Debiendo en consecuencia, la señora Jueza Segunda Laboral del Circuito de Riohacha, declarar su falta de jurisdicción, y remitir el expediente, a la jurisdicción pertinente para que proceda su trámite litigioso, conforme a lo regla el CGP, en su artículo 138, por remisión expresa del artículo 145 del Código Procesal Del Trabajo De La Seguridad Social”.*

Ante lo afirmado por la parte demandante se debe decir que, los incidentes se ocupan de cuestiones accidentales, o incidentales, de donde proviene su nombre, que influyen de manera más o menos efectiva, según su naturaleza, en el adelantamiento del proceso o en la solución de los contenidos del conflicto. En el derecho procesal colombiano ha sido objeto de polémica intensa la necesidad de evitar que los incidentes entorpezcan la definición de la causa pretendi, como consecuencia de la excesiva facilidad con que podía demorar la decisión final, por el sistema de provocar incidentes; lo que se convirtió en un recurso dilatorio, que era autorizado por la propia ley procesal. Cuando se expidió el Código Procesal del Trabajo, se acogió el criterio de promover la formulación de los incidentes, cuyos motivos existieran en el momento en que se debiera realizar la primera audiencia de trámite en el proceso. Esto, con el fin de evitar que el proceso tuviera dilaciones injustificadas, y, además, se preceptuó allí que los incidentes, de manera general, se decidieran en la sentencia definitiva, sin suspender el curso del proceso.¹

En este orden de ideas es menester, traer a colación lo contemplado por el C.P.T y S.S en su artículo 37 -modificado por la Ley 1149 del 2007 art 2° **“PROPOSICIÓN Y TRAMITE DE INCIDENTES. Los incidentes solo podrán proponerse en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio, a menos de que se trate de hechos ocurridos con posterioridad; quien los propone deberá aportar las pruebas en la misma audiencia; se decidirán en la sentencia definitiva, salvo los que por su naturaleza y fines requieren de una decisión previa”**

En ese sentido, la norma en cita indica las dos oportunidades para que la parte legitimada proponga los incidentes y son 1) *en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio.* 2) *posterior al trámite consagrado en el artículo*

¹ Sentencia C-492/93



77 del C.P.L. siempre que se trate de hechos nuevos, surgidos con posterioridad a dicho trámite.

También es clara la Sentencia C-492/93 cuando dice: “Como se puede apreciar, no es que no se puedan proponer incidentes con posterioridad a la primera audiencia de trámite, porque el mismo artículo contempla los dos eventos: presentar incidentes en la primera audiencia de trámite; que es la regla general, para que el proceso sea ordenado, con lealtad de las partes, sin dilaciones injustificadas y para que se dé una pronta y cumplida administración de justicia, porque no se suspende el juicio; y las excepciones a la regla general, para cuando se trae de hechos ocurridos con posterioridad a esta primera audiencia de trámite, se pueden proponer los incidentes, sin desconocer de ninguna forma el debido proceso ni mucho menos el derecho de defensa de las partes”

En ese sentido en este trámite se tiene que la audiencia de que trata el artículo 77 de C.P.L. en la que deben proponerse los incidentes se realizó el día 2 de octubre de 2017, momento en el cual debió la parte en cuestión proponer el incidente que hoy nos ocupa, sin embargo remite el memorial contentivo de dicha solicitud el 22 de marzo de 2023, cuando no solo se había dictado sentencia dentro del proceso ordinario, decisión que por no haber sido objeto de recurso quedó debidamente ejecutoriada, sino que a continuación del proceso ordinario se siguió con el trámite ejecutivo en el cual, se libró mandamiento de pago, medidas cautelares, se dictó la sentencia ejecutiva ordenando seguir adelante con la ejecución, se ordenó practicar la liquidación del crédito y se condenó en costas a la parte demandada.

Puestas así las cosas, es dable dejar sentado que los trámites procesales se componen de etapas que son conclusivas; conforme lo indica la norma en cita, la E.S.E. demandada podía en su escrito de contestación de demanda proponer excepción de falta de jurisdicción o en la respectiva audiencia, el incidente pertinente, toda vez que no se trata de un hecho nuevo, puesto que tuvo conocimiento del mismo al correrse traslado de la demanda y las pruebas anexas, sin embargo, guardó silencio y solo pasados 5 años hace alusión a dicho medio de defensa, coligiendo el despacho que el Incidente en estudio fue propuesto de manera extemporánea.

No obstante lo anterior, importa decir también que el demandante no solicita el pago de un contrato estatal, contrario a ello se observa que, aunque existe una orden de servicios, certificación que señala la existencia de contratos de prestación de servicios entre el señor **MANUEL ENRIQUE RIVADENEIRA** y **E.S.E HOSPITAL SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA DE DIBULLA**; con base en esos documentos, el actor en la demanda aludida pretendió la declaratoria de un contrato de trabajo bajo el principio de la primicia de la realidad, por desempeñar el cargo de conductor, aspecto que da la categoría de trabajador oficial y también la competencia a este juzgado², el cual fue dilucidado en la sentencia ordinaria haciendo la diferencia entre empleados públicos y trabajadores oficiales, enmarcando al demandante en este último grupo, por las labores desempeñadas.

Por lo anteriormente expuesto, este Juzgado Segundo Laboral del Circuito:

RESUELVE:

² Auto del 28 de marzo de 2023. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, La Guajira, Sala Civil Familia Laboral. M.P. Henry de Jesús Calderón Raudales. Por medio del cual confirmó la providencia proferida el 26 de agosto de 2022, por este Juzgado, al declarar improcedente el incidente de declaratoria de falta de jurisdicción, por considerar que debió proponerse en la audiencia de que trata el artículo 77 del CPTSSS y no se trata de un asunto nuevo.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el Incidente de Declaratoria de Falta de Jurisdicción propuesto por la parte demandada, conforme a los considerandos de este proveído.

SEGUNDO: CONTINÚESE con el trámite de este proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Enedis Mercedes Monroy Redondo'.

ENEDIS MERCEDES MONROY REDONDO
Jueza.